Walter Márquez
Coordinador

Mariana Duque – Clara Ramírez
Relatoras

Apartheid Fronterizo

Cierre de Frontera Colombo – Venezolana
Abril, 2013

Informe Especial de la Oficina Parlamentaria de Walter Márquez diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela

Walter Márquez

Licenciado en Historia en la Universidad de Los Andes de Mérida. Defensor de los Derechos Humanos. Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela para un quinto periodo constitucional. Diplomático con amplia experiencia universitaria y legislativa. Docente universitario por más de 35 años en la ULA Mérida y en la ULA Táchira. Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano de Amistad con la India. Embajador de Venezuela en la India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanca. Elaboró informes sobre la pobreza en Venezuela junto con Muhamad Yunus, fundador del Banco de los Pobres de Bangladesh y Premio Nóbel de la Paz año 2006. Editor del libro, versión en español, "Mahatma Gandhi: Un Apóstol de la Ecología Humana Aplicada", del científico indio T.N. Khoshoo, junto a R.K. Pachauri, presidente del instituto TERI de la India y presidente del Comité de la ONU para el Cambio Climático, ganador junto con Al Gore del Premio Nobel de la Paz 2007. Autor de: "La Guardia Nacional de Venezuela, los Comandos del Crimen", "La Masacre de El Amparo". Autor de dos obras cortas, "Visas y Pasaportes en el nuevo milenio", y "Visión de La India". Se desempeñó como Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Gobernación del estado Táchira; presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Cultura Venezuela – India (VEN-BHARAT).

Clara Ramírez

Abogada de la República de Venezuela. Egresada de la Universidad Católica del Táchira –UCAT, en el 2007. Cursante de postgrado de Derecho del Trabajo en la UCAT, etapa de tesis. Asesor Legal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Gobernación del estado Táchira hasta el 2012. Abogada en libre ejercicio en las áreas de derecho laboral, civil, mercantil, protección de niños, niñas y adolescentes, y derecho administrativo. Asesor legal Oficina Parlamentaria diputado Walter Márquez

Mariana Duque

Licenciada en Comunicación Social. Egresada de la Universidad de Los Andes –ULA. Periodista del Diario Los Andes Táchira Corresponsal del Diario Últimas Noticias. Premio Municipal de Periodismo "J.J. Mora Figueroa" año 2011. Mención Prensa, Premio Estadal de Periodismo "Domingo Guzmán Escandón" año 2011. Mención Prensa, Premio Estadal de Periodismo "Ramón J. Velásquez" año 2013. Mención Investigación, Premio Estadal de Periodismo "Domingo Guzmán Escandón" año 2011.

Foto de portada: Grupo de Paracaidistas bloquean a colombianos y venezolanos, en el Puente Internacional Simón Bolívar.

Depósito Legal: lf07620133213592.

ISBN: 978-980-12-6926-7

Walter Márquez
Coordinador
Mariana Duque - Clara Ramírez
Relatoras

Apartheid Fronterizo

Cierre de Frontera Colombo – Venezolana
Abril, 2013

Informe Especial de la Oficina Parlamentaria de Walter Márquez diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela

Análisis del Cierre de la Frontera Colombo – Venezolana.
Abril 2013

Coordinador: Walter Márquez. Parlamentario e Historiador

Relatoras: Mariana Duque. Periodista
Clara Ramírez. Abogada

Fuentes Documentales: Diario La Nación- San Cristóbal
Diario Los Andes – San Cristóbal
Diario Católico – San Cristóbal
Diario Últimas Noticias – Caracas
Diario El Universal - Caracas
Canal de televisión Globovisión – Caracas
Notittarde.com
Diario 2001.com
Diario La Opinión- Cúcuta

Fuentes Fotográficas: Luis Parada. Diario Los Andes
Schneyder Mendoza. Diario La Opinión
Mario Caicedo. Diario La Opinión.
Jorge Briceño. Oficina Parlamentaria
Diario La Nación- Táchira.
Diario El Universal.
Noticias 24

Diseño Gráfico y Diagramación: Laura Uribe G.
Corrector de estilo: Omar Ocariz.
I.S.B.N: 979-980-12-6926-7
Depósito Legal: If07620133213592
waltermarquez.com.ve /waltermarquez@waltermarquez.com.ve
Teléfono de contacto: 0276 8832536
Noviembre, 2013.

Más allá de las vinculaciones políticas, sociales y económicas, la historia y la geografía se han encargado de crear una vinculación múltiple y progresiva entre los dos países. Entre Colombia y Venezuela, hay una verdadera simbiosis.

"Es un tercer país que ha creado sus normas, que tiene su propia moral, que tiene sus específicos objetivos (…) Ese tercer país, que ya no es exactamente ni Colombia ni Venezuela."

Arturo Uslar Pietri.
Diario El Tiempo (Bogotá) 28 de julio de 1996.

Presentación

Ante las graves repercusiones humanas, económicas, sociales y políticas que generó el bloqueo a la frontera Colombo-Venezolana en el mes de abril de 2013, con ocasión a las elecciones presidenciales de Venezuela, la Oficina Parlamentaria del diputado a la Asamblea Nacional e historiador Walter Márquez, con el apoyo de la periodista Mariana Duque y la abogada Clara Ramírez, recopiló de fuentes documentales que aparecieron en los diarios regionales, La Nación, Los Andes y Católico de la ciudad de San Cristóbal, capital del Táchira, diversos testimonios con el fin de precisar las violaciones a los Derechos Humanos, y las consecuencias económicas y sociales que éste hecho provocó tanto en Venezuela como en Colombia.

También se tomaron como referencia las publicaciones de los diarios nacionales, Últimas Noticias, El Universal, Diario de Caracas, así como la televisora nacional Globovisión ubicada en Caracas,

además de los medios digitales Notitarde.com y el Diario 2001.com, de la capital venezolana.

El Diario La Opinión de Cúcuta, le dio amplia cobertura al tema del cierre fronterizo, relató detalladamente cómo hicieron los venezolanos para trasladarse a Venezuela, se develó el estado en que se encuentran las trochas, cuántos kilómetros tuvieron que recorrer, el pago que tenían que dar a sus guías, así como también los atropellos que sufrieron de parte de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Igualmente le dedicó una Editorial a la situación, y dio a conocer información, a la que los medios de comunicación venezolanos, tal vez, no tuvieron acceso.

En los análisis que se realizaron, se pudo obtener testimonios de personas que fueron afectadas de manera directa por el ***"Apartheid ó Bloqueo Fronterizo"***, ya que el cierre llevado a cabo, seis días antes de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, se hizo sin tomar en cuenta una realidad que el insigne escritor e historiador venezolano Arturo Uslar Pietri describió como ***"un tercer país",*** que es la fusión geopolítica de Venezuela y Colombia, y para conocer las causas y consecuencias, en lo político, social, jurídico y económico de éste bloqueo, se realizó éste análisis integral del cierre fronterizo, a fin de evitar que, en el futuro se repitan circunstancias como éstas.

Visión Fronteriza

Las relaciones entre Colombia y Venezuela, especialmente en la zona de frontera, existen desde la época de la conquista y de la colonización. La fundación de San Cristóbal, a cargo de Juan de Maldonado el 31 de marzo de 1561, salió de Pamplona, en 1547. Del Tocuyo partió una expedición que pasó por los Valles de San Cristóbal, exploró los Valles de Cúcuta y llegó hasta Bogotá.

En la época colonial existieron muchos vínculos de comercio entre ambas regiones, incluso los movimientos pre independentistas que estallaron en Colombia, como la Revolución de los Comuneros de El Socorro en 1781, que se manifestó en El Socorro en Colombia y llegó a Pamplona, posteriormente a Cúcuta, y de allí a Venezuela, a San Antonio del Táchira en 1781, y luego avanzó hasta Mérida y Trujillo.

El proceso independentista también establece vínculos binacionales, ya que en 1811 se realizaron acuerdos de amistad entre

Cundinamarca y la Capitanía General de Venezuela, como fue el caso del Tratado de Alianza y Confederación, firmado por José Cortés de Madariaga y Jorge Tadeo Lozano. En 1813, el Libertador Simón Bolívar con tropas colombianas provenientes de Cartagena y de la Nueva Granada, ocupan Venezuela en la Campaña Admirable, luego esas tropas que le había aportado Colombia a Venezuela, se las va a retribuir El Libertador en 1819, pues a través del Paso de Los Andes llegó por la retaguardia, y libró la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819.

A partir de 1830, cuando se consumó la desintegración de la Gran Colombia, ambas naciones se vieron en la necesidad de delimitar su territorio, por lo que firman acuerdos de cooperación, luego se profundizaron vínculos económicos en la época del desarrollo cafetalero, y, es así, como el Táchira a mediados del siglo XIX, exportaba café a través de Puerto Cachos en Colombia, en el río Zulia y el río Catatumbo en Venezuela.

A lo largo de este proceso, en 1832 se firmó un Tratado de Amistad, Alianza, Comercio, Límites y Navegación, entre los presidentes de Venezuela y Colombia; pero a pesar de los múltiples acuerdos suscritos entre ambos países desde esa época hasta la actualidad, se han suscitado altercados que han generado tensiones entre ambas naciones.

Han existido varios presidentes colombianos y venezolanos con ancestros en ambas naciones, uno de los más importantes líderes colombianos, Francisco de Paula Santander, tenía ancestros en San

Cristóbal, y en el caso del expresidente Virgilio Barco Vargas, su abuela era de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Por su parte, el expresidente venezolano Juan Vicente Gómez desciende de colombianos, lo mismo que el General Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez y Ramón J Velázquez; es más, el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también es descendiente de colombianos, pues su madre era de Cúcuta, lo que pone de manifiesto la serie de vínculos entre ambos países a lo largo de la historia colombo venezolana, no sólo en materia de consanguinidad, sino también de carácter social, comercial y cultural, desde la vida colonial, pasando por la independentista, hasta llegar a la republicana.

Al hablar de la frontera colombo venezolana en la región del Táchira con el Norte de Santander, no podemos limitarnos a hacer referencia sólo a los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, ya que debemos incluir además, a Boca de Grita, en el municipio García de Hevia, que es frontera con Puerto Santander, así como la población de Delicias, en el municipio Rafael Urdaneta, la cual colinda con las poblaciones de Oasis, vereda El Cañoral y Ragonvalia en Colombia, espacio geográfico fronterizo en el que por cierto entre 1883 y 1890 fue creado el Territorio Federal Armisticio, dándole un carácter especial para los habitantes de ambos países. En el Norte de Santander –Colombia-, por el lado del vecino país, se encuentran las poblaciones de Villa del Rosario y Cúcuta, las cuales mantienen

intercambio fronterizo tradicional e histórico de diversos productos.

En el pasado se registraron divergencias puntuales en aspectos fronterizos, pero en las últimas décadas se han llevado a cabo conversaciones y negociaciones sobre áreas marinas y submarinas, las cuencas hidrográficas, migraciones, el tema de los refugiados, el robo de vehículos, secuestros, la guerrilla, el combate del tráfico de drogas, entre otros aspectos de la criminalidad que forzosamente transculturiza en el intercambio binacional, aunque algunos acuerdos firmados entre ambos países, se han visto frenados por divergencias políticas.

Actualmente, las mutuas denuncias y los problemas de inseguridad, no están siendo procesados de manera conjunta y hay ausencia de acción oficial coordinada para controlar las zonas compartidas, como "zonas de aliviaderos", por organizaciones que actúan al margen de la ley, lo que permite el tránsito de la droga, el paso o refugio de guerrillas y autodefensas, a territorio venezolano, con desplazamiento de las bandas criminales en ambos territorios.

Desde el año 1999, las divergencias entre ambas naciones se han hecho sentir hasta en la posición frente a los desterrados y/o desplazados por la guerra interna que vive Colombia desde la década del 40. Venezuela no les ha conferido la condición de refugiados, sino de ciudadanos en tránsito por su territorio, sin controles ni siquiera de orden migratorio, se habla de más de 300 mil movilizados en tal situación; mientras Colombia ha pedido la actuación de los organismos

internacionales para atender esas emergencias humanitarias y su regularización institucional entre ambos países. Es de observar que en cada nación, algunos sectores utilizan esas diferencias para fines partidarios y políticos específicos, por lo que la frontera ha sido víctima de los conflictos electorales de cada Estado.

Es muy difícil trazar una línea imaginaria en la frontera colombo venezolana, así la geopolítica o la geografía lo determinen, porque los vínculos entre ambas naciones son tan sólidos en lo histórico, cultural, tradicional y costumbrista, que por estas razones, entre otras no menos importantes, es que el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, llamó a esta región, un "Tercer País".

Dinámica fronteriza colombo – venezolana. Foto: Noticias 24

Acuerdos y Desacuerdos Venezuela - Colombia

Las etapas entre Colombia y Venezuela, en el marco de sus relaciones diplomáticas desde la disolución de la Gran Colombia, han sido entre otras, las siguientes: de 1829 a 1830, Venezuela anuncia su separación e inician las controversias por los límites fronterizos, con el Tratado Pombo- Michelena en 1836 y, el Tratado Romero- Pombo, en 1842, se aprueba la libertad de comercio y de navegación.

Luego, en el año 1881, se firmó un Protocolo para el Restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas, así como el Tratado de Arbitramento sobre Límites, a cargo de Antonio Leocadio Guzmán por Venezuela, y Justo Arosemena por Colombia. Esto luego dio paso a la firma del Acta sobre Bases de un Tratado de Navegación, Fronteras y Comercio Fronterizo y de Tránsito en 1905, y a la firma de la Convención para la Completa Demarcación de la frontera en 1916.

Sobre los aspectos relativos a la frontera entre los dos países, también se estableció un acuerdo en el año 1928, denominado, Acuerdo por Canje de Notas, que versaba sobre puntos relativos a la frontera común de los dos países, y más tarde, en 1934, ya se comenzaron a firmar arreglos comerciales por el vivo intercambio existente en la zona fronteriza, el cual no escapa, desde ese entonces, de la posibilidad del contrabando de extracción, por lo que en 1938, se suscribió el Convenio para la Prevención y Represión del Contrabando.

Después, el 5 de abril de 1941 se lleva a cabo la firma del Tratado de Límites entre Venezuela y Colombia, y un año después, en 1942 se crea el Estatuto del Régimen Fronterizo, mientras que en 1943 se fundamenta el Convenio, con el fin de facilitar el tráfico comercial aéreo en las regiones fronterizas de ambos países.

En lo que se refiere a las operaciones aéreas, se estableció un Convenio en 1951, mediante el cual se adoptan medidas de seguridad aérea para las operaciones de aeronaves en los aeropuertos de San Antonio del Táchira y Cúcuta, luego ocho años después, en 1959, ambas naciones ratifican sus lazos de amistad, con el Instrumento de Reafirmación de Amistad Colombo- Venezolana.

Para 1960 se logra la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de la cual forman parte ambos países, distinguida con las siglas -ALALC-, y en el año 1967, se ejecuta el Acuerdo relacionado con la construcción de los Puentes Internacionales de

San Antonio y Ureña, y el Puente sobre el Río Arauca. En 1969 surgió la creación del Acuerdo de Cartagena, en 1973 se lleva a cabo el ingreso de Venezuela a esta institución de integración regional, que después, en el año de 1996, diera paso al Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones, denominada como la CAN en sus siglas.

Las reglas para el comercio binacional se siguen estableciendo en 1975, mediante la firma del Convenio para Regular la Tributación de la Inversión Estatal y de las Empresas de Transporte Internacional, tres años después, en 1978, ambos países tratan lo que se refiere a la supresión de visas en pasaportes diplomáticos y el Convenio para la Prevención, Control y Represión del Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Pero para el año 1980 fracasaron las negociaciones para delimitar áreas marinas y submarinas, y se dio paso a una crisis binacional, que afectó ostensiblemente e hizo decaer el comercio bilateral, esta crisis fue solucionada en 1985 con la Declaración Conjunta del Arauca, pues reanudan labores de demarcación y densificación de la frontera. Ese mismo año se firman los Convenios de Cooperación Cultural, y de Intercambio Comercial, además se firmó el Acuerdo Sobre Transporte Internacional de Pasajeros y de Carga por Carretera, e igualmente un Tratado de Extradición.

Luego, en 1987, se registró el incidente de la Corbeta Caldas, por lo que volvieron a enfriarse las relaciones bilaterales, causado

por el ingreso de una nave de la Armada de Colombia en aguas del Golfo de Venezuela, sobre el cual no existe una delimitación aceptada por ambos países.

Dos años después, en 1989, se lleva a cabo la Declaración de Ureña y la redefinición del Pacto Andino. En marzo de 1991, el presidente de Colombia César Gaviria Trujillo, y el de Venezuela Carlos Andrés Pérez, firmaron en Caracas, el Acuerdo sobre la Profundización del Diseño Estratégico del Proceso de Integración Andina, entre la República de Venezuela y la República de Colombia; así como también, el Acta de Entendimiento sobre la Zona de Integración Fronteriza en el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, y en ese mismo año se establece el Acuerdo para Combatir el Secuestro y otros delitos comunes.

En febrero de 1992, se lleva a cabo la Declaración de Maiquetía, que tenía como objetivo, el inicio de una Zona Libre de Comercio Binacional, lo que representó una etapa de crecimiento y diversificación del comercio bilateral hasta 1998, también se firmaron en 1993, los Acuerdos sobre Producción y Comercialización de la Papa y el Arroz.

Los ministros, de Defensa General Fernando Ochoa Antich, por Venezuela, y la canciller Noemí Sanín de Rubio, por Colombia, suscribieron en 1994, un Acuerdo para la Detección, Recuperación y Devolución de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, y

el Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas judicialmente, y para el año 1995, se creó la Unión Aduanera Andina.

En 1999, se inició una nueva etapa en las relaciones diplomáticas, al surgir controversias comerciales y políticas, con la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez al poder. Las diferencias ideológicas en las estrategias de desarrollo nacional se hicieron sentir, tanto así, que Colombia acusa a Venezuela de apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), de ese país, y aunado a esto, surge un conflicto en el área de transporte que disminuye el ritmo del crecimiento económico, cayendo, progresivamente, el comercio binacional hasta el año 2003.

En 2004 resurgió el crecimiento económico bilateral, pero en 2005 ocurre el incidente de Rodrigo Granda, guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien fue detenido en territorio venezolano por acciones encubiertas de las fuerzas militares venezolanas y colombianas. Los ánimos entre ambos países se caldearon, porque el presidente venezolano Hugo Chávez, le exigió al gobierno colombiano de Álvaro Uribe, una disculpa, por considerar que el hecho era una “violación de la soberanía venezolana”. El presidente Uribe se negó a disculparse, alegando que Colombia era el país ofendido, ya que el gobierno de Venezuela “daba refugio a terroristas de las “FARC”, por ello se da el cierre temporal de la frontera, coetáneamente culminan negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Estados

Unidos y Colombia; y entre Estados Unidos y Perú, que exacerba más las adversiones, y consecuencialmente se aprueba el ingreso de Venezuela al Mercosur.

Del 2007 al 2008, se continuó con el crecimiento del comercio, pero se inició una nueva crisis diplomática entre el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, pues muere durante un operativo militar colombiano realizado en territorio ecuatoriano, el guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, miembro del Secretariado de esa organización subversiva, portavoz y asesor del Bloque del Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a quien en su computadora, el Gobierno del vecino país le detecta, datos comprometedores de su relación con líderes de Venezuela.

En el año 2011, una vez que Juan Manuel Santos llega a la Presidencia de Colombia, la relación de amistad entre ambas naciones volvió a resurgir, después de que éstos Jefes de Estado sostuvieran un encuentro en Santa Marta, República de Colombia, donde suscribieron un Tratado de No Agresión, que permitiera a ambas naciones resolver los temas bilaterales, sin el uso de la fuerza.

De igual manera, establecieron acuerdos en materia comercial, entre los que se encuentra la eliminación de las “barreras arancelarias”, de 3 mil 500 productos, que representan gran parte de los intercambios bilaterales de los últimos seis años. Además

acordaron la venta de 50 mil cabezas de ganado colombianas a empresarios venezolanos, mientras que en materia energética firmaron pactos, para la creación de empresas mixtas en la exploración de hidrocarburos en la frontera común; y la construcción de un oleoducto que conectará ambos países, así como la construcción de una Central Hidroeléctrica que abastecería a los residentes en ambos pueblos fronterizos.

Al morir el presidente venezolano Hugo Chávez en marzo del año 2013, su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, asistió a sus honras fúnebres en Caracas; y después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, reconoció a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del reclamo electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia de los resultados, por parte del candidato opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien en su condición de líder de la oposición venezolana, dispensara una visita a territorio colombiano, y fuere recibido por el presidente Juan Manuel Santos el 29 de mayo de 2013, acto considerado por el Gobierno venezolano como de provocación, lo cual ha enturbiado de nuevo, las relaciones bilaterales.

El Bloqueo a dos países

En ocasiones anteriores, y durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, la frontera entre Colombia y Venezuela, era cerrada con solo 24 horas de antelación a los procesos electorales, por lo que la ciudadanía tomaba las previsiones necesarias para no viajar hacia el otro país, si no era necesario.

De hecho, en las elecciones del año 2000, no se llevó a cabo el cierre fronterizo, y en el año 2006, se realizó por pocas horas, así se evidencia de la Resolución Conjunta del Ministerio de Interior y Justicia Nº 433, y del Ministerio de la Defensa Nº DG 037804, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 350.088, de fecha 30 de noviembre de 2006, donde en su artículo sexto, se ordena el control de desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, como aérea o acuática y de vehículos, durante el período comprendido entre

las 00:00 horas del día domingo 03 de diciembre de 2006 y, hasta que el Consejo Nacional Electoral dictamine la finalización del proceso de votación. (Subrayado propio para éste escrito).

Para las elecciones regionales de diciembre de 2012, en Resolución Conjunta del Ministerio de Interior y Justicia N° 310, y del Ministerio de la Defensa N° 024967, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 398.412, de fecha 13 de diciembre de 2012, se ordena el control de desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre como aérea o acuática y de vehículos, durante el período comprendido, entre las 18:00 horas del día jueves 13 de diciembre de 2012, y hasta las 12:00 horas del medio día del lunes 17 de diciembre de 2012.

Para las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril de 2013, con el Gobierno nacional bajo el mando de Nicolás Maduro Moros, uno de los candidatos presidenciales y actual Presidente de la República, el cierre de frontera se llevó a cabo de manera sorpresiva, seis días antes de los comicios, ocasionando con ello una grave crisis social y económica para los municipios fronterizos, de ambas naciones.

El día anterior al cierre, voceros del Comando Simón Bolívar del candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles Radonski, en el estado Táchira, habían advertido la situación, pues observaron mucho movimiento en San Antonio del Táchira de parte de las fuerzas militares, pero al Ejecutivo Nacional no le

importó el llamado de atención que éstos hicieran, y pocas horas después dieron un "madrugonazo", que dejó bloqueadas hacia el otro lado del Puente Internacional "Simón Bolívar" en San Antonio del Táchira; del Puente "Francisco de Paula Santander" en Ureña, y Puente "Unión" en Boca de Grita, a más de 20 mil personas afectadas, de ambas nacionalidades, atribuladas y angustiadas por una situación que les era ajena, con un atropello abierto, manifiesto, público y notorio a sus derechos humanos y fundamentales.

El día 8 de abril de 2013, horas antes de lo que fuere el cierre sorpresivo de frontera, el integrante del comando Simón Bolívar en Táchira, Gustavo Rangel, denunció el posible cierre fronterizo en las horas siguientes, porque en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña ya existía movimiento militar, y recordó que este tipo de acciones realizadas con más de 72 horas de antelación al proceso electoral presidencial, trae como consecuencia pérdidas económicas multimillonarias, además manifestó que sí es necesario que se despliegue una zona de seguridad, debe hacerse, más no el cierre de la frontera con tanta antelación, porque son los comerciantes fronterizos los que se ven afectados[1].

De acuerdo a la nota de prensa publicada en el Diario de Los Andes, el 10 de abril, el cierre de frontera, "tomó por sorpresa a

1- http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/regiones/denuncian-cierre-de-fronteraenlas-proximas-horas.aspx. Denuncian cierre de frontera en las últimas horas (Últimas Noticias). 08.04.2013.

venezolanos y colombianos", durante todo el día la gente desesperada trataba de pasar por las diferentes trochas y caminos que comunican a los dos países, a través del río Táchira, lo que generó que varios ciudadanos fueran detenidos, aunque se desconocía el número total y cuándo se pondrían en libertad[2].

Según la presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de San Antonio del Táchira Isabel Castillo, el cierre fronterizo afecta las relaciones comerciales binacionales, porque "para nadie es un secreto que, en la industria siempre hemos tenido falta de mano de obra calificada, y esa, lamentablemente viene de nuestra hermana República de Colombia"[3].

Calculó que los trabajadores de la frontera en un 70% son colombianos, quienes necesitan del libre tránsito para poder llegar a sus lugares de trabajo, "Se puede cerrar la frontera, lógicamente, pero el día sábado como lo han hecho en otros procesos electorales, no con tantos días de anticipación, porque, lamentablemente, la frontera sufre y nosotros lo que queremos, de verdad, es que no se forme aquí un colapso"[4].

El cierre inesperado de la frontera, generó protestas en los puentes internacionales, tal y como lo reflejó el Diario La Nación, el mismo 10 de abril. Según detalla el artículo de prensa, la medida fue ejecutada por militares de la Brigada de Paracaidistas del Ejército, que de acuerdo a nuestras investigaciones, estaban bajo el mando del

General del Ejército Jesús Suárez Chourio, con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y los cordones de seguridad de la GNB, impedían en San Antonio acercarse a la Aduana Principal, mientras que en la mitad del Puente Simón Bolívar, había otra barricada con militares, que impedían el paso hacia Colombia o Venezuela.

La vigilancia también se extendía a las trochas o caminos verdes existentes en la margen del río Táchira. De igual forma, se apreciaron alcabalas móviles del Ejército en la vía desde San Antonio hacia Ureña[5].

Todas estas medidas, que en algunos casos llegaron a ser casi inhumanas, evidencian que se generó una flagrante violación del Derecho al Libre Tránsito, contemplado en nuestra Constitución en el Artículo 50, que garantiza*: **"Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los***

2- Cierre de frontera tomó por sorpresa a venezolanos y colombianos. En: Diario de Los Andes Táchira. Sección Eje Fronterizo. Página 5. 10.04.2013.

3- Cierre de frontera tomó por sorpresa a venezolanos y colombianos. En: Diario de Los Andes Táchira. Sección Eje Fronterizo. Página 5. 10.04.2013.

4- Ídem.

5- Protestas por el cierre de los puentes internacionales. En: Diario La Nación. Sección: Información. Cuerpo A. Página 3. 10.04.203.

Soldados de la Brigada de Paracaidistas impiden el paso hacia Venezuela en el Puente Internacional Simón Bolívar. Foto Diario La Opinión de Cúcuta.

supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas".

También les fue coartado el Derecho a la Educación, a varios estudiantes, que si bien reciben clases dentro de los municipios fronterizos venezolanos, su residencia se encuentra dentro de los municipios del Norte de Santander – Colombia, y viceversa, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 102, cito*: **"La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal".***

Hubo viajeros que manifestaron ir a visitar familiares, otros a realizarse tratamientos médicos, o simplemente en tránsito, y se quedaron represados en la frontera, situación que les acarrea problemas y diferentes contratiempos. Según las cifras manejadas

por los gremios de comerciantes de Ureña y San Antonio, más de 30 mil personas atraviesan diariamente la frontera entre Táchira y Norte de Santander, y más de la mitad de ese número, realiza actividades laborales y económicas en la región"[6].

Una de las situaciones más críticas que se presentó con el cierre de la frontera, fue la que afectó el Derecho a la Salud, ya que cientos de ciudadanos venezolanos, por la situación en que se encuentran las instituciones de salud pública en Venezuela, deben acudir a la ciudad de Cúcuta a realizarse tratamientos como diálisis y radiaciones, terapias éstas que no pueden ser interrumpidas, y que generó la angustia de quienes allí se encontraban, pues sin consideración de ningún tipo, les violaron su derecho humano inalienable y fundamental, tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 8***:"La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República".***

6- Protestas por el cierre de los puentes internacionales. En: Diario La Nación. Sección: Información. Cuerpo A. Página 3. 10.04.203.

Aunado a todo esto, el Derecho al Trabajo, se vio cercenado por las actuaciones desmedidas de las Fuerzas Armadas Venezolanas, al cerrar la frontera colombo venezolana, derecho consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se refiere al derecho y deber de trabajar: ***"Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca".***

Mientras esto ocurría, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, aseguraba que "la frontera fue custodiada para garantizar seguridad en los comicios"[7].

Desde el municipio fronterizo de Pedro María Ureña, el Mandatario regional indicó que, los órganos de seguridad custodian los límites territoriales "para evitar cualquier plan desestabilizador de la derecha", previo a las elecciones, al mismo tiempo que aclaró que no se trataba de un cierre fronterizo.

7- Vielma Mora: "…frontera fue custodiada para garantizar seguridad en los comicios". En: Diario Católico. Sección Local. Página 2. 10.04.2013

Afirmó que, el cierre se adelantó, "previendo la situación irregular registrada en el acto de la oposición del pasado sábado, cuando un equipo de inteligencia detectó que había un importante número de ciudadanos colombianos alojados en hoteles y posadas que presuntamente, participaron de la concentración y al término de la actividad buscaban el retorno al hermano país", también acotó que, cuando sucede el cierre desde Colombia, la medida es vista como "algo natural"[8].

A pesar de negar el cierre fronterizo, y tratarlo como una medida de seguridad, con estas declaraciones, el Mandatario regional aceptó y justificó una medida violatoria de los derechos fundamentales de los venezolanos y colombianos, entre otras cosas, el Gobernador del Táchira, hace presumir que todo el que habita en la zona fronteriza es delincuente, y un elemento generador de disturbios para la nación.

El mismo día del cierre, el 9 de abril de 2013, el diputado a la Asamblea Nacional por el circuito de la frontera tachirense, Walter Márquez estuvo en San Antonio del Táchira, en el Puente Internacional Simón Bolívar y en Ureña en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, sitios desde donde conoció desde cerca lo que estaba sucediendo y pudo conversar con autoridades militares y algunas de las personas que se encontraban en el lugar.

8- Vielma Mora: "…frontera fue custodiada para garantizar seguridad en los comicios". En: Diario Católico. Sección Local. Página 2. 10.04.2013

Allí manifestó a los medios de comunicación regionales y nacionales, que el cierre fronterizo constituye una violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y afirmó que son responsables de la violación de las leyes constitucionales, quienes cumplieron la ejecución del cierre, desde el Comandante de la Zona de Integración Fronteriza (ZODI), hasta el último soldado que la cumplió[9].

El Parlamentario explicó que, para que se ejecuten este tipo de medidas, primero debe decretarse un Estado de Excepción, en Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido en los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna.

En estas circunstancias se deben restringir las garantías constitucionales, publicar la medida en Gaceta Oficial, notificarle al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y países miembros, e informar a la Asamblea Nacional, así como al Tribunal Supremo de Justicia.

Expuso que en este caso, se violó la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que, en su artículo 7, numeral 13, establece que no se puede suspender el Derecho al Sufragio; igualmente se vulneró el Derecho al Libre Tránsito consagrado en el artículo

9- Walter Márquez: "El cierre de la frontera viola Constitución y pactos internacionales". En: Diario Católico. Sección: Local. 10.04.2013

Walter Márquez diputado a la Asamblea Nacional por el circuito de la frontera, durante su visita a la zona de bloqueo internacional. Foto Oficina Parlamentaria.

50 de la Constitución de la República; así como el artículo 15, sobre Políticas Fronterizas; y el 153 que garantiza la Integración Latinoamericana y Caribeña, y el Derecho de Igualdad ante la Ley.

Por el lado colombiano, el Diario La Opinión de Cúcuta, bajo el título "Venezuela cierra sus fronteras por seis días", describió la situación vivida por colombianos y venezolanos por el cierre fronterizo, calificado por los propios ciudadanos como, "inoportuno y arbitrario".

"Es increíble que el gobierno nos esté haciendo esto. Mi esposo no puede sostenerse en pie. Tenemos que llegar a la casa urgente", les gritaba una mujer venezolana a los militares que se limitaban a observar detrás de las vallas con púas, y la dama indignada, agregaba: "soy venezolana, soy chavista, pero me duele que me hagan esto, nos tocó cruzar a Cúcuta para comprar la medicina, porque acá (San Antonio) no tenemos nada", exclamaba, mientras les mostraba a los oficiales su cédula de ciudadanía venezolana, en medio del Puente Internacional Simón Bolívar que conduce a San Antonio del Táchira[10].

Con éste testimonio, se evidencia una reiterada violación de Derechos Humanos como los señalados en párrafos precedentes, el Derecho al Libre Tránsito y el Derecho a la Salud, la nota de prensa

10- Venezuela cierra sus fronteras por seis días. En: La Opinión. Página 8. 10.04.2013

detalla que, aproximadamente a las 11 de la mañana del 9 de abril, en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander que conducen a San Antonio y Ureña, una marea humana pedía a gritos, con carteles y mostrando sus cedulas venezolanas, que por favor dejaran pasar a los ancianos, enfermos y niños, pero a pesar de las súplicas, poco o nada lograban, evidenciándose un nuevo caso de violación colectiva al Derecho a la Salud, y demás Derechos Humanos, anteriormente señalados.

"Desprecio por el Táchira" aseguró el jefe del Comando de Campaña Simón Bolívar en el estado Táchira, Nelson Chacín, "demostró el Gobierno nacional con el cierre de frontera"

"Este cierre ordenado por el señor presidente Encargado de la República, Nicolás Maduro, sólo demuestra el odio e irrespeto que siente por quienes vivimos aquí, donde nace la patria venezolana; la relación familiar, la relación de trabajo, la relación comercial que existe y se desarrolla en nuestra frontera, es vital para los tachirenses, pero parece no importarle a quien, hoy ocupa de manera sobrevenida la silla presidencial, porque este Gobierno cree que todos los que vivimos en esta zona somos sospechosos de algo"[11].

Chacín denunció que, durante el cierre fronterizo, el concejal y jefe del Comando Simón Bolívar en el municipio Pedro María Ureña, Alejandro "Tato" García, fue secuestrado en su vivienda en el sector El Cerrito, una urbanización ubicada a 200 metros de

la frontera con Colombia, junto a otras 20 familias, a quienes el Ejército venezolano no les permitía la salida, aún y cuando habitan en territorio venezolano.

Para el día 11 de abril, el diario La Opinión de Cúcuta(,) abrió su página principal con el título "Espera en la frontera", y una gráfica que en su leyenda decía: "Colombianos y Venezolanos esperan pacientes en los Puentes Internacionales que comunican a Cúcuta, con San Antonio y Ureña, y a Puerto de Santander, con Boca de Grita; desde el martes, el Gobierno venezolano dispuso el cierre de sus fronteras con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo, no se han presentado situaciones que lamentar."[12]

La editorial reseña que, el cierre no fue anunciado, por lo que personas de ambos lados calificaban la medida como arbitraria, abusiva e ilegal, pero destacan que, no es ni lo uno, ni lo otro, si se pretendía evitar que a Venezuela ingresaran desde Colombia, miles de potenciales electores que pudieran modificar los resultados electorales del 14 de abril.

En esa misma edición, La Opinión cuenta la historia de una pareja de esposos que quedaron "atrapados" en Cúcuta, con el cierre de la frontera, explican que, Alicia Acevedo de Barajas, de

11- Chacín, Nelson: "Gobierno demostró desprecio por el Táchira". En: Diario de Los Andes. Sección: Política. Página 4. 10.04.2013
12- Espera en la frontera. En: Diario La Opinión. Titular. Página 1. Cuerpo A. 11.04.2013

Bloqueo en Puente Unión que comunica a Puerto de Santander con Boca de Grita. Foto: Diario La Opinión de Cúcuta.

62 años de edad, llegó el sábado anterior al cierre de la frontera, a la ciudad de Cúcuta, desde la capital venezolana de Caracas, para visitar a un hermano que estaba internado en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, ella habría viajado con su esposo de 71 años de edad, José Vicente Barajas, quien padece una enfermedad cerebral que no le deja valerse por sus propios medios, además de tener que chequearse la tensión.

El diario relata lo siguiente: "Ayer, a las 10:00 de la mañana, a través de la valla con alambre de púas, en el Puente Internacional Simón Bolívar, Alicia Acevedo le imploraba a un oficial de la Brigada de Paracaidistas del Ejército venezolano, que la dejara pasar con su esposo, para tomar un bus de regreso a Caracas… además de no dejar perder una cita médica para José Vicente, la pareja de esposos, oriundos ambos de la capital venezolana, no tenían dinero para pagar una noche más, en un alojamiento cercano."[13]

De igual manera explicaron que los puentes seguían fuertemente custodiados y que las autoridades municipales, como el alcalde de San Antonio del Táchira, Vicente Cañas, aseguraban que, el cierre fronterizo era una decisión tomada por el "Alto Gobierno", para garantizar la tranquilidad de los electores que viven en los municipios del Táchira, y que comunican con Colombia.

13- Venezolanos atrapados por el cierre de frontera. En: Diario La Opinión. Página 8. Cuerpo A. 11.04.2013

Afirmaron a su vez que, según información suministrada por la Gobernación de Norte de Santander, el martes a las 9 de la noche, los militares venezolanos, abrieron paso durante una hora, para personas enfermas, ancianos y niños.

Pero de lado colombiano, no sólo describieron lo que estaba sucediendo, sino que también, La Opinión le dedicó su editorial del día 11 de abril al cierre de frontera, analizando la importancia que al parecer tiene el voto colombiano para el Gobierno venezolano, quien tuvo como excusa un cierre de seis días, para evitar el voto de los "electores apátridas".

La editorial reseña que, el cierre no fue anunciado, por lo que personas de ambos lados calificaban la medida como arbitraria, abusiva e ilegal, pero destacan que, no es ni lo uno, ni lo otro, si se pretendía evitar que a Venezuela ingresaran desde Colombia, miles de potenciales electores que pudieran modificar los resultados electorales del 14 de abril. Sin embargo se preguntaron, si "los electores venezolanos de origen colombiano, que viven de este lado de la frontera, ¿están en la capacidad de influir en los resultados de la votación en uno u otro sentido?", a lo que se respondieron: "Parece que si, según lo considera el Gobierno. Esos serían los votos apátridas a los que hizo referencia el gobernador Vielma."[14]

Sobre el aviso previo, que debe existir entre un país y otro, al cerrar la frontera, la editorial de La Opinión destaca que

(,) Colombia cierra sus fronteras durante los procesos electorales, pero por 24 horas, lo que contrasta, notoriamente, con los siete días ordenados por el Gobierno venezolano.

"Por lo general, en aras de la cortesía debida entre gobiernos, el país que va a tomar medidas de cierre informa a sus vecinos sobre lo que ocurrirá. Pero, en este caso, si lo que se pretendía era aislar a los 'electores apátridas' el anuncio previo hubiera sido una voz de alerta para ellos... Desde luego, muchas actividades ordinarias se entorpecen con un cierre sorpresivo y tan prolongado como el actual, en especial en una frontera como la nuestra, considerada como la más activa y dinámica de esta parte del mundo. Pero, tal vez, el gobierno vecino consideró que las razones de Estado son más poderosas que las de los trabajadores, comerciantes y los visitantes de uno u otro país"[15].

Al hacer un análisis de lo ocurrido el 12 de abril de 2013, el presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas del Táchira, Andrés Eloy Rojas, aseguró que se violaron los Derechos Humanos, con el cierre arbitrario de la frontera, entre ellos, el Derecho al Libre Desenvolvimiento de la Personalidad, que, a su parecer, la gente desconoce.

Considera que si el escenario hubiera sido como el expuesto por el Gobernador del Táchira, para salvaguardar la soberanía

14- Un cierre cuestionado. En: Diario La Opinión. Página 3. Cuerpo A. 11.04.2013.
15- Ídem.

nacional, “el Presidente de la República debió haber emitido un decreto, el cual declare el Estado de Excepción por Conmoción… es penoso que él (Vielma Mora), que dice ser abogado, desconozca esta materia jurídica, y haya afirmado que era necesaria. Deberá el Gobernador regresar al segundo año de derecho, para aprender sobre materia constitucional. El Estado de Excepción hubiera permitido tomar previsiones, sobre todo para las personas, que son las primeras afectadas, se han violado Derechos Humanos y estamos ante la presencia de delitos de lesa humanidad.”[16]

El 12 de abril, el diputado a la Asamblea Nacional e historiador Walter Márquez, solicitó a la Fiscalía del Ministerio Público, enjuiciar a los ministros de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y de Defensa, Diego Molero, ante los atropellos que se registraron con ocasión al cierre de la frontera colombo – venezolana (…) [17]

Márquez le pidió a la Fiscal General de la República, investigar los hechos por Delitos de Lesa Humanidad, y que se les determine responsabilidades integrales, penales, civiles, disciplinarias y administrativas, por ser ellos quienes ordenaron “ilegalmente”, el cierre fronterizo.

El legislador solicitó, entre otras cosas, que se designen fiscales especiales que, garanticen los derechos violados a los habitantes de la frontera, y anunció que enviaría una notificación al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Un día antes del proceso electoral, el 13 de abril, la ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, Iris Varela, se refirió al cierre de la frontera, manifestando que fue oportuno tanto en esta ocasión, como para las elecciones regionales en diciembre de 2012. Afirmó que el General a cargo en la Zona de Frontera, Jesús Suárez Chourio, le comentó que encontraron trochas, que llegan a los patios traseros de las viviendas, y, por su puerta frontal, la gente salía y entraba, "como si nada."[18]

De igual manera, denunció la presencia de 30 a 40 personas en un galpón, las cuales al ser interrogadas sobre datos básicos venezolanos, supuestamente evidenciaban que no tenían información, y sólo iban a ejercer su derecho al voto, sin conocer una dirección en Venezuela, e indicó que se detuvieron cientos de personas, en zona limítrofe.

"Dejen el descaro, porque esas personas vienen con el voto comprado, pero claro que les duele, porque les afecta. Sin embargo, sabemos que cualquier decisión de esas no va afectar la de millones de venezolanos."[19]

16- Andrés Eloy Rojas: "Se han violado los derechos humanos por el cierre arbitrario de la frontera". En: Diario La Nación. Sección: Información. Cuerpo C. Página 3. 12 de abril 2013.
17- Piden enjuiciar a ministros Reverol y Molero por cierre de frontera. En: Diario de Los Andes. Sección: Política. Página 4. 12 de abril 2013.
18- Varela, Iris: "Los Rastrojos me tienen en la mira". En: Diario de Los Andes: Sección Información. Página 12. 14 de abril de 2013.
19- Varela, Iris: "Los Rastrojos me tienen en la mira". En: Diario de Los Andes: Sección Información. Página 12. 14 de abril de 2013.

Según la Ministra para el Sistema Penitenciario, algunos de los detenidos en la frontera, fueron deportados, y, supuestamente, varios de ellos portaban armas de fuego, dijo además que desde el lado venezolano, por el río Táchira, las autoridades podían observar a otras personas del lado colombiano, con armamento.

Sin lugar a dudas estas declaraciones emitidas por la Ministra para el Régimen Penitenciario, son aseveraciones bien fuertes, que denigran de alguna u otra manera de aquellos ciudadanos que se encontraban represados a ambos lados de la frontera, y que lo único que pretendían era intentar cruzar, en medio de la desesperación, ya que muchos se encontraban envueltos en dramas de salud, y contra quienes tomaron medidas, en algunos casos inhumanas y ésta ciudadana Ministra, los señala falsamente de no ser venezolanos, y de en algunos casos, portar armas.

Las Trochas

Para poder llegar a Venezuela o a Colombia, los ciudadanos de ambos países, que quedaron atrapados en la zona fronteriza, recurrieron al cruce de trochas y ríos con el fin de transitar hacia sus destinos, sin importar el riesgo que corrían, muchos de ellos se lanzaron a una aventura que, no sólo implicaba gastos, sino también la posibilidad de ser detenidos por los efectivos militares, como en efecto sucedió en algunos casos.

Muchas personas, de las que fueron sorprendidas por el componente militar venezolano, no solamente tuvieron que pasar largas horas tras las rejas sin su documento de identidad –el cual en algunos casos fue entregado hasta la semana siguiente de las elecciones-, sino que también sufrieron maltratos físicos, psicológicos y amenazas de que serían tratados como “pimpineros”, y, por lo tanto, estarían sometidos a las autoridades venezolanas, por un delito no cometido.

El Diario La Opinión de Cúcuta, fue el encargo de contar durante varios días estas historias, la primera de ellas fue publicada al día siguiente del cierre fronterizo, el 10 de abril, allí destacaron que en el paso limítrofe que comunica a Puerto de Santander con La Grita, se albergaban unas 40 personas, quienes, tal vez, tendrían más posibilidades de cruzar la frontera, "Desde temprano, los Guardias que están del lado venezolano, les dijeron a los que manejan las canoas, que si iban a cobrar 50 bolívares por pasar cada persona, a ellos les tenían que dar 20 bolívares, sostuvo Juan Antonio Olivares, un comerciante colombiano, propietario de un supermercado en La Grita… A tres cuadras del puente Unión, un grupo de canoeros se ofrecía para cruzar el río Guarumito con todo lo que entrara en sus botes, maletines, cajas, paquetes y hasta motocicletas se embarcaban y lograban llegar a tierra bolivariana."[20]

Al día siguiente, el diario colombiano destacó que, desde una finca, en La Parada, pequeños grupos de personas, a pocos metros de lo que quedaba de río, se atrevían a cruzar corriendo los casi 200 metros que separan ambas orillas, para lograrlo, los mototaxistas los llevaban hasta la finca en La Parada, y de ahí en adelante, todo dependía en la negociación con el dueño, y el Guardia ubicado del lado venezolano.[21]

Bajo el titular, "Venezolanos retenidos en la frontera denuncian maltratos", el Diario La Opinión de Cúcuta, describió algunas situaciones a las que fueron expuestos los residentes venezolanos, que intentaron ingresar a su país, por la vía de las

trochas, de manos de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en San Antonio del Táchira. "Según las declaraciones de Fidel Molina Mendoza, identificado con cédula V-3.999.705, la detención se dio a las 10:00 de la mañana (hora venezolana), cuando llegaba a San Antonio por una trocha, en ese instante, los militares venezolanos lo condujeron hacia un recinto, afirmando que obedecían órdenes, y lo soltaron a las 6:30 de la tarde, junto a un grupo de personas que pasaron por el mismo proceso… Me retuvieron esta mañana aquí en San Antonio, y me sacan a esta hora de la tarde, hacia el lado colombiano, siendo que soy un ciudadano venezolano, contó Molina, y agregó, que no le permitieron comunicarse con su familia."[22]

De igual manera, cuentan la historia de Carlos Duarte, otro venezolano, a quien le habrían cortado el cabello (se lo hicieron comer), y lo amenazaron con cortarle una oreja, un dedo, y con llevarlo preso si no hablaba, "para Duarte, las cosas empeoraron cuando les 'insertaron' unas pimpinas, que según él, agravarían la situación, ya que podrían ser juzgados como pimpineros."[23]

Una mujer, que estaba en Cúcuta con su nieta visitando un familiar, también habría sido agredida por los efectivos castrenses,

20- Venezuela cierra sus fronteras por seis días. En: Diario La Opinión. Sección: Frontera. Página 8. Cuerpo A.10.04.2013
21- Venezolanos atrapados por el cierre de la frontera. En: Diario La Opinión. Página 8. Cuerpo A. 11.04.2013.
22- Venezolanos retenidos en la frontera denuncian malos tratos. En: Diario La Opinión. Sección: Al Cierre. Página 6. Cuerpo A. 12.04.2013
23- Ídem

cuando intentaba cruzar la frontera por una trocha. De acuerdo al relato, la dama tomó la decisión de cruzar ese camino, preocupada por llevar a su nieta de vuelta a casa, "le pagaron a una guía para que las llevase, pasaron por una invasión, entre La Parada y San Antonio del Táchira, y fueron detenidas en el barrio Curazao, cerca del río, con ella estaban alrededor de 30 personas, algunas con niños de brazos y adultos mayores… al grupo les retuvieron sus cédulas de identidad, por 12 horas estuvieron secuestrados, sostuvo la mujer, y aunque ya estaban en Venezuela, los devolvieron a Colombia. Ella narra que fueron irrespetuosos con el grupo, que los ofendieron, que los amenazaron, les decían que "eso les pasa por estar en Colombia, no tenían nada que hacer ahí".[24]

Pero ese transitar tiene su costo, en una crónica realizada por el Diario cucuteño La Opinión, titulada "Crónica de un viaje por trocha a Venezuela", donde relatan el estado de las vías, por donde deben transitar a pie, en moto y en canoa, quienes quedan represados en el vecino país, destacan que unos 350 bolívares, cuesta en promedio, pasar al otro lado de la frontera.

Explican que antes de llegar al Puente Internacional Simón Bolívar, que conduce a San Antonio del Táchira, los conductores de taxis piratas, y los mototaxistas, amontonados en los andenes, abordan al viajero con la pregunta ¿Va pal otro lado?, "por 50 mil

24- Venezolanos retenidos en la frontera denuncian malos tratos. En: Diario La Opinión. Sección: Al Cierre. Página 6. Cuerpo A. 12.04.2013

Integrantes del Ceofanb detienen a colombianos y venezolanos que pasaron por las trochas. Foto Diario Los Andes- Táchira.

bolívares venezolanos (cerca de 400 pesos colombianos), un pirata lo deja en la entrada de la trocha San Francisco, en Juan Frío, corregimiento de Villa del Rosario, una vez allí, vuelve la pregunta: ¿Va pal otro lado?, si la respuesta es positiva, el guía pide un poco de paciencia para reunir al grupo, –de unas cinco personas-, y emprender el itinerario, además de 250 bolívares, que vale el viaje".[25]

Según detallan, para regresar a Colombia, hay varias alternativas, en el centro de San Antonio, se le pregunta a un mototaxista cómo regresar a Cúcuta, y éste responde que por una finca, y que ya tienen todo arreglado con la Guardia, por lo que tiene un valor de 300 bolívares.

En los sectores de La Invasión y Libertador, en San Antonio, hay varias trochas por fincas que conducen a La Parada, en Villa del Rosario, "el hijo de una propietaria de estas fincas, que desde el martes está pasando gente a lado y lado de la frontera, recibe a los clientes que llegan a su parcela diciendo: 'mi mamá dice que la pasada cuesta 250 bolívares'… sin embargo, por estos días estos tramos son custodiados por efectivos del Ejército venezolano, que no dudan incluso en disparar, cuando advierten la presencia de algún ilegítimo extranjero".[26]

25- Crónica de un viaje por trocha a Venezuela. En: Diario La Opinión. Sección: Frontera. Página8. Cuerpo A. 13.04.2013.
26- Los votantes que se salieron con la suya. En: La Opinión de Cúcuta. Cuerpo A. Página 7. 15.04.2013
27- Ídem.
28- Los votantes que se salieron con la suya. En: La Opinión de Cúcuta. Cuerpo A. Página 7. 15.04.2013

Indican que en Llano Jorge, otro guía, ofrece sus servicios para acompañar a las personas hasta Juan Frío, por un valor de 200 bolívares.

La Opinión de Cúcuta, realizó una crónica el 15 de abril, titulada "Los votantes que se salieron con la suya", en la cual explican, lo que hicieron los venezolanos que quedaron en Colombia, para poder pasar a votar.

"Una de estas rutas está ubicada en el sector de El Cerrito, cerca de la cárcel Modelo, se trata como es natural de un camino poco transitado, una estrecha calle destapada, que se ha abierto con el frecuente paso de vehículos, allí desemboca en una planicie, desde la que se ve pasar el río Táchira, para ingresar hay una reja, que abre o cierra el dueño del lote, al que se paga 300 bolívares fuertes, para que los carros puedan pasar, pero a la orilla del río (,) hay varios hombres en pantaloneta y botas pantaneras, ellos se encargan de pasar sobre sus hombros a las personas que paguen la cuota, de 100 bolívares fuertes".[27]

Explicaron que, para el mediodía del domingo 14 de abril, los cargadores pasaron al menos unas 400 personas, "nosotros los dejamos al otro lado del río, eso ya es Ureña, ellos caminan como 20 minutos, y cuando llegan allá, les pagan a un taxi, y salen por la cancha La Plazuela".[28]

La crónica realizada destaca que, en Puerto de Santander, río abajo, en el barrio La Piragua, en las playas donde encallan las

lanchas, hubo un movimiento más agitado de lo normal el 14 de abril, “desde el territorio del vecino país, se acerca una lancha con cinco pasajeros, sin más motor que los brazos de un niño conocido por los vecinos como “Turmas”, una vez en Puerto Santander, cada uno le paga 50 bolívares fuertes, que es lo que vale haber cruzado el río… del vehículo se apean todos con el dedo meñique de la mano derecha pintado con la tinta morada que identifica a quienes han votado en Venezuela”.[29]

Estas historias son una pequeña parte, de lo que cientos de venezolanos tuvieron que pasar, para poder llegar a su país, no sólo con el fin de ejercer su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, sino también para poder llegar a la tranquilidad de sus hogares y no correr riesgos en otro país desconocido, sin dinero durante seis días, que era lo que más les preocupaba.

Las autoridades venezolanas, nunca dieron respuestas a las denuncias registradas sobre estos casos, para ellos, lo único importante era evitar el voto fronterizo que, en muchas oportunidades más bien les era beneficioso, a la final poco les sirvió su jugada política, muchos venezolanos pudieron pasar a su

29- Los votantes que se salieron con la suya. En: La Opinión de Cúcuta. Cuerpo A. Página 7. 15.04.2013
30- http://diariodelosandes.com/content/view/219143/105984/. Más de 86 detenciones y 560 retenciones de cédula en la frontera.

país a través de las trochas, y el voto de los municipios de frontera fue adverso al gobierno del presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral y juramentado por la Asamblea Nacional venezolana, Nicolás Maduro, a quien su adversario, Henrique Capriles Radonski, le cuestionó su elección ante la Sala Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ-.

El número total de detenidos no se conoció, solo se maneja el registro ofrecido por la Mesa de la Unidad Democrática –MUD- el día miércoles 10 de abril con el que afirmaban que había hasta el momento "más de 86 detenciones arbitrarias y 560 retenciones de cédula, bajo acciones del Destacamento 11 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela".[30]

En esa oportunidad, el representante de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, Gustavo Rangel, denunció que, "112 personas que necesitaban realizarse diálisis en Cúcuta, estaban esperando que los efectivos castrenses se apiadaran de su situación, y los dejaran pasar al vecino país, para poder continuar con su tratamiento que debe ser semanal[31]; en ese momento hizo un llamado al defensor del Pueblo en el estado Táchira, Aarón Díaz, para que tomase cartas en el asunto, pero nunca hubo respuesta alguna.

La única respuesta ofrecida, fue la explicación del jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General Wilmer Barrientos, quien afirmó que la

medida de cierre anticipado de la zona fronteriza con Colombia, Brasil y Guyana fue acertada, y que el pueblo la recibió con total satisfacción.

"Los habitantes de las zonas fronterizas me han expresado su satisfacción por mayor presencia de alimentos en anaqueles de los abastos y comercios que, en otras oportunidades y por todas las pretensiones de generar zozobra, son sacados al otro lado de la frontera"[32], aseveró.

Militares detienen en las trochas a quienes intentaban cruzar la frontera colombo-venezolana.

31- http://diariodelosandes.com/content/view/219143/105984/. Más de 86 detenciones y 560 retenciones de cédula en la frontera.
32- http://www.2001.com.ve/presidenciales-2013/barrientos--cierre-anticipado-de-la-frontera-ha-sido-una-medida-acertada.html. Barrientos: Cierre anticipado de la frontera ha sido una medida acertada.

Pérdidas Económicas

Al hacer un cálculo de las pérdidas económicas, generadas por el cierre de la frontera colombo venezolana durante seis días, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, Domingo Isidoro Teres, manifestó que se calculan más de 500 millones de bolívares, en pérdidas económicas, en el sector productivo y servicios del eje fronterizo de San Antonio y Ureña.

"Nosotros vemos con mucha preocupación que por un lado se plantea relanzar o potenciar la producción en los municipios fronterizos y, por otro lado se le paraliza, es algo que es inaudito... en cuanto a lo humanitario hemos conocido de muchos casos y de situaciones familiares, de personas que no han podido cruzar la frontera, pedidos de ambulancia que no les han permitido cruzar, situaciones de pasajeros en tránsito, estudiantes y personas venezolanas que acuden a las instituciones educativas del lado

colombiano, que no han podido acudir a sus clases y han perdido exámenes y citas médicas perdidas”[33].

Éstas situaciones fueron las más constantes durante el cierre de la frontera, reiterándose así las violaciones colectivas de Derechos Humanos a miles de venezolanos, que se vieron limitados en el ejercicio de sus derechos, tanto del trabajo, como de la salud, la educación y el libre tránsito, garantizados formalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más no respetados materialmente por el Estado venezolano, quien obró, a través de sus funcionarios, de manera inconstitucional y prevaricando su propio ordenamiento jurídico en detrimento de sus nacionales.

Al hacer un cálculo en dólares de las pérdidas económicas expresadas por el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, a valor de 6.30 el $ USA, tenemos que esos 500 millones de bolívares, se traducen en un aproximado de 80 mil millones de dólares ($ USA).

De acuerdo a una nota de prensa publicada por el diario nacional El Universal, el empresario y expresidente de Fedecámaras Táchira, José Roso, manifestó que el cierre de frontera elevó el costo de operaciones comerciales entre un 20 y 25%.

“La represión del transporte pesado, la prolongación del tiempo de almacenaje de los productos, y los trámites aduaneros,

incrementaron los costos entre un 20 y 25%... Se acentuó la escasez de productos alimenticios y farmacéuticos, en esa localidad… También se afectó el comercio de la zona limítrofe, por cuanto diariamente transitan unos 15.000 vehículos por los puentes internacionales Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, y Francisco de Paula Santander en Cúcuta, y no pudieron movilizarse en el plazo antes señalado".[34]

Por el lado colombiano calcularon en 750 millones de pesos, las pérdidas diarias por el cierre fronterizo. En fecha del 13 de abril, el Diario La Opinión de Cúcuta, indicó que se estimaba en los seis días en que fue suspendido el paso por Puentes Internacionales de San Antonio y Ureña, el Departamento Norte de Santander dejó de recibir la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos.[35]

Explicaron que los principales productos de exportación afectados por la medida fueron: carbón, cerámica y ganado. 30 camiones cargados de ganado no habrían podido pasar a Venezuela y ya varios empresarios habían suspendido las exportaciones por los rumores de cierre.

33- Calculan 500 millones en pérdidas por cierre fronterizo. En: Diario de Los Andes. Sección: Eje Fronterizo.18.04.2013
34- El Universal. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130419/cierre-de-frontera-elevo-los-costos-del-comercio-en-25%. Cierre de frontera elevó los costos del comercio en 25%. 19.04.2013
35- $750 millones, las pérdidas diarias por el cierre de la frontera. En: Diario La Opinión. Sección: Económica. Página 11. Cuerpo A. 15.04.2013

Detallan que, según el representante de Induarcilla, Jairo Yáñez, el sector cerámico dejaría de exportar, cerca de 498 millones de pesos, durante el cierre. “Lo más grave es que esta decisión, deja sin sueldo diario a 1.500 empleados, vinculados a las empresas de cerámica y arcilla, del Norte de Santander”[36]

Por su parte, Gabriel Tamayo, miembro de Asocarbón, del Norte de Santander, estimó que se perdieron negocios por 3 mil 240 millones de pesos, a los que se suman cerca de 250 transportadores venezolanos, que se quedaron sin trabajo, según explicó, la paralización de las actividades dejaría a 3 mil operarios sin actividades, en el Departamento del Norte de Santander.

Luis Alberto Rusián, presidente Ejecutivo de la Cámara Venezolana Colombiana de Comercio –Cavecol-, afirmó el 11 de abril de 2013, que un volumen no cuantificado de carga, para el momento, se quedó varado en ambos lados de la frontera colombo venezolana, tras el cierre sin previo aviso, del paso fronterizo, por lo que la medida habría generado “altos costos”[37].

De acuerdo a un sonido, publicado en la página web del Diario Últimas Noticias de Venezuela, realizado durante una entrevista por radio a Rusián, éste afirmó que el intercambio comercial se vio fuertemente afectado, sobre todo, porque al no ser anunciada una medida que se realizó con tantos días de antelación, quedaron paralizadas las actividades de importación y exportación de ambos países, “tenemos el

caso concreto de una empresa, que quedó con veinte camiones cisternas en el lado de Paraguachón, que iban de exportación hacia Colombia, cuando se toman medidas como ésta, y hay algún proceso en tránsito, debe colocarse en un almacén, o regresar con todo hacia Paraguachón, que es en el estado Zulia, sobre La Guajira; y llevarlo a Valencia que es donde está la empresa, o que los conductores permanezcan durante todos estos días, con esos camiones cisternas en la carretera", expresó.

El Presidente de CAVECOL, también ofreció una entrevista el 18 de abril de 2013, al Diario Notitarde de Venezuela, donde explicó que, las importaciones retenidas afectan ciertos productos básicos y el abastecimiento, "eso incrementa los costos operativos, se han dado distintas operaciones que afectan las transacciones".[38]

De igual manera, destacó que, el cierre fronterizo paraliza la producción, porque el personal que trabaja en frontera no puede llegar a sus puestos de trabajo, "se tiene que pensar en otros mecanismos, porque la gente habilita las trochas, que llevan implícito, como nos han dicho, el pago a funcionarios."[39]

36- $750 millones, las pérdidas diarias por el cierre de la frontera. En: Diario La Opinión. Sección: Económica. Página 11. Cuerpo A. 15.04.2013
37- Cavecol: "Altos costos generó cierre imprevisto de la frontera" http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/audio---cavecol--altos-costos-genero-cierre-imprev.aspx. (Últimas Noticias). 11.04.2013
38- Cavecol: Cierre de frontera aumenta costos operativos. http://www.notitarde.com/Economia/Cavecol-Cierre-de-frontera-aumenta-costos-operativos/2013/04/18/180180. (Notitarde. Com)
39- Cavecol: Cierre de frontera aumenta costos operativos. http://www.notitarde.com/Economia/Cavecol-Cierre-de-frontera-aumenta-costos-operativos/2013/04/18/180180. (Notitarde. Com). 18.04.2013

Un aproximado de 8 mil 238 millones de pesos, dejaron de producirse durante estos seis días de cierre fronterizo, lo que deja claro que, las decisiones tomadas por el Gobierno venezolano se ejecutaron de manera unilateral, pensando solo en el tema electoral, y sin medir las consecuencias sociales y económicas que se producirían en Venezuela y Colombia.

Sin lugar a dudas, con el cierre de la frontera, fue cercenado el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a los derechos económicos, que señala: ***"Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes(…) El Estado promoverá la iniciativa privada(…) la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país".***

Con motivo de las elecciones del 14 de abril, el Estado venezolano, no solamente limitó la actividad económica , y por lo tanto, el desarrollo humano, u otras razones de interés social, sino que también, durante seis días obstruyó la iniciativa privada y la justa distribución de la riqueza establecida en este artículo de la Carta Magna, cercenó a su vez, la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, pues la mayoría de las actividades de este sector, que laboran en la zona fronteriza, tuvieron que cerrar sus puertas, en

primer lugar, porque el mayor porcentaje de trabajadores proviene del Norte de Santander y no pudieron atravesar la línea limítrofe, y en segundo lugar, porque no había labores de ningún tipo, por ausencia de compradores fronterizos.

Multimillonarias pérdidas de pesos y bolívares ocasionó Apartheid fronterizo.
Foto: Diario El Universal

Análisis Electoral

Históricamente ha existido, una activa participación de electores de la frontera que en la época de los gobiernos democráticos entre 1959 y 1998, se le llamó la ***"Venezuela Dos"***, que era controlada por Acción Democrática, con una participación minoritaria, del partido socialcristiano Copei.

Posteriormente, con la llegada al poder del presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, en 1998, se incrementó la votación que antes la controlaban los partidos tradicionales de AD y Copei, la cual comenzó a ser captada de manera mayoritaria por el MVR, y posteriormente, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y los integrantes del Polo Patriótico, que eran aliados del Presidente de la República y su partido político PSUV.

En Venezuela, se crearon durante el Gobierno del presidente Chávez, programas sociales que denominaron misiones, entre ellas la denominada "Misión Identidad", propiciada en octubre de 2003, con las que se otorgó una gran cantidad de documentos de identidad venezolanos, a residentes colombianos, la mayoría de los cuales no reunían los requisitos, pero eran operaciones políticas, para captar una clientela electoral, que luego la inscribían en el Registro Electoral Permanente de Venezuela.

Con las confrontaciones entre Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez, a lo que se sumó el deterioro de la moneda, del peso frente al bolívar y del bolívar frente al dólar, se profundizó la crisis económica de la frontera, producto de la devaluación de nuestra moneda, lo que llevó además a la máxima confrontación, cuando el Jefe de Estado venezolano, ordenó romper relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, el 21 de julio del año 2010.

Los problemas diplomáticos entre ambos países, se iniciaron después de la captura del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda, ocurrida el 13 de diciembre de 2004, en Venezuela. El presidente Hugo Chávez, exigió en esa oportunidad al Gobierno colombiano una disculpa, por considerar que el hecho era una "violación de la soberanía venezolana", pero el presidente Uribe, se negó a presentar disculpas, argumentando que Colombia era el país ofendido, ya que el gobierno de Venezuela "daba refugio a terroristas de las FARC".

Pero la relación entre ambos países, se hizo más difícil, después de la muerte del miembro del Secretariado, portavoz y asesor del Bloque del Sur de las FARC, el guerrillero Raúl Reyes, durante un operativo de inteligencia liderado por el actual presidente de Colombia, y ejecutado por quien para ese entonces era ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Reyes fallece en territorio ecuatoriano, a causa de una incursión a uno de sus campamentos realizado por fuerzas de seguridad colombianas, murió desangrado, a causa de la amputación de la pierna, cuando huyendo del bombardeo, cayó víctima de una mina antipersonal colocada por la misma FARC como perímetro de defensa, en caso de que incursionarán por vía terrestre, diseñadas para matar o incapacitar a sus objetivos.

El operativo generó una crisis de relaciones entre Ecuador, Colombia y Venezuela. La crisis se debió, a la violación del Derecho Internacional y de la soberanía del territorio ecuatoriano. El 2 de marzo de 2008, durante una alocución de Aló Presidente, Hugo Chávez manifestó que la muerte de Reyes, fue un “cobarde asesinato”, y afirmó que se produjo sin ningún combate.

En ese momento ordenó movilizar 10 batallones de tropas venezolanas a la frontera, retirar a todos los funcionarios venezolanos que se encontraban en Bogotá, y dijo que enviaría

aviones Sukhoi a la frontera, en caso de ordenarse una incursión militar colombiana al territorio venezolano.

A partir de allí, se fue deteriorando fuertemente el electorado de la frontera, que antes estaba a favor, pero ahora en contra del presidente Hugo Chávez. Frente a esta situación, en las elecciones regionales de gobernadores y diputados al Consejo Legislativo Estadal, del 16 de diciembre del año 2012, el actual gobernador del Táchira José Vielma Mora, quien para ese entonces era candidato, logró que se bloqueara la frontera, por parte de la Administración Nacional, con cuatro días de anticipación.

El ahora Mandatario regional pensó erróneamente que la votación que obtuvo durante ese proceso comicial, era producto del bloqueo fronterizo, cuando en realidad, fue la abstención ante el desánimo de los electores, por la pérdida del candidato presidencial de la oposición para las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, Henrique Capriles Radonski, así como también por el rechazo que tenía quien era el candidato a la reelección en la Gobernación por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, César Alejandro Pérez Vivas.

De acuerdo a informaciones procesadas por la Oficina Parlamentaria del diputado Walter Márquez, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, logró motivar al Ejecutivo nacional, a través de Nicolás Maduro, como presidente

Encargado, al ministro del Interior y Justicia Néstor Reverol, y al ministro de la Defensa Diego Molero, para que hicieran un nuevo "cierre de frontera", antes de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, con el argumento de que bloquearían los votos que iban para la alianza democrática, y con el fin de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganara los comicios presidenciales en el Táchira, partiendo de la falsa premisa que había inferido erróneamente en los comicios regionales.

Los cálculos del Gobernador del estado, indudablemente fueron erróneos, ya que su premisa mayor le falló, porque la realidad electoral, cuan premisa menor, demostró como consecuencia todo lo contrario; es decir, el silogismo electoral les resultó falso.

Una infografía elaborada al respecto, donde se comparan los resultados electorales en los municipios de frontera del 14 de abril de 2013, tanto en el municipio Bolívar, que comunica con el Puente Internacional Simón Bolívar; así como en Ureña, que comunica con el Puente Internacional Francisco de Paula Santander; Junín, Rafael Urdaneta y la parroquia Boca de Grita en Puente Unión del municipio García de Hevia, deja claro que la diferencia electoral, a favor de Henrique Capriles Radonski fue de 60 mil 442 votos, mientras que a favor de Nicolás Maduro, fueron 36 mil 445 votos. En términos porcentuales fueron, el 60.47% a favor de Henrique Capriles Radonski, y el 39.40% a favor de Nicolás Maduro, con una diferencia total general de 21.07%, a favor de la alianza democrática.

Esto confirma que en esa supuesta lógica electoral, cometieron un gravísimo error, tanto el Gobierno regional, como el Gobierno nacional y el propio PSUV como organización política, pues el resultado electoral, como ya se dejo sentado, les fue adverso. Los analistas electorales han señalado que los votos que vienen del lado colombiano, no son decisivos en una elección presidencial, a lo sumo pudieran influir en una elección municipal o cuando la diferencia sea muy poca, en una elección de Gobernador, pero, definitivamente, no incide en una elección presidencial; y a pesar de fuertes controles de los organismos de seguridad en el Estado, y de las Fuerzas Militares, la gente votó masivamente en la frontera contra el candidato oficialista Nicolás Maduro Moros, en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

Es importante señalar que con ésta medida del "cierre de la frontera", se viola flagrantemente el Derecho al Sufragio de cientos de venezolanos que por residir en una frontera latinoamericana tan viva como la colombo - venezolana, sea porque han establecido su residencia en Villa del Rosario o en Cúcuta, Norte de Santander, ambas localidades colombianas y fronterizas con el estado Táchira, pero que mantienen su domicilio, tomándose éste como el asiento central de sus negocios e intereses, en la ciudad de San Antonio y Ureña y viceversa, generándose así por razones geopolíticas, geosociales, geolaborales, geoculturales, geoeconómicas u otras georeferencias, toda una geometropolización del eje fronterizo Cúcuta- San Antonio-Ureña, y demás áreas aledañas, a cuya población no les era dable

que se les privara, para el 7 de octubre de 2012 y el 14 de abril de 2013, ejercer su derecho fundamental, humano, constitucional y legal de votar en las elecciones presidenciales y regionales de Venezuela, excepto por el hecho de que funcionariado del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, lo obstruyeran e impidieran, como en efecto materialmente lo hicieron en forma inconstitucional, sin que sea valido excusarse que lo hicieron por el ¨cumplimiento de órdenes superiores".

De igual forma, no permitieron el paso por razones de salud, a algunos pacientes que debían dirigirse a Cúcuta a realizarse tratamientos médicos, llegaron incluso a negar el suministro de alimentos y bebidas a los infantes que se encontraban a la espera de la apertura del paso, y los que estaban detenidos con sus padres, de acuerdo a la reseña del Diario de Los Andes Táchira, en sus páginas 6 y 7 de fecha 10 de abril de 2013.[40]

No hemos realizado un análisis comparativo de los niveles de abstención y los resultados electorales de las elecciones regionales del año 2008, de la enmienda constitucional de 2009, de las elecciones parlamentarias de 2010, y de las elecciones presidenciales de octubre de 2012, ya que solamente nos hemos limitado a analizar el "cierre fronterizo", de las elecciones

40- http://diariodelosandes.com/content/view/219049/105975/. Con lágrimas y expresiones de rabia ciudadanos demostraron molestia por cierre fronterizo. (Diario de Los Andes).

presidenciales de abril de 2013, porque es el objetivo de este trabajo.

Al hacer un análisis comparativo, se observa claramente que la abstención del 14 de abril de 2013, con respecto a las otras elecciones, varió muy poco, lo cual demuestra que influyó en un mínimo porcentaje el cierre de frontera. Esta medida, más bien potenció el rechazo electoral hacia los sectores gubernamentales, por el error estratégico y político, cometido por el oficialismo, como lo demuestra la siguiente infografía.

FUENTE CNE EL PODER ELECTORAL **Resultados electorales (municipios frontera Táchira) 14 de abril 2013**

Infografía: Walter Márquez

Municipio	Votos Cantidad		Porcentaje	Diferencia
Bolívar	18.087	HCR	67.14 %	**34.41 % HCR**
	8.819	NM	32.73 %	
Ureña	11.977	HCR	63.99 %	**28.15 % HCR**
	6.709	NM	35.84 %	
Junín	27.624	HCR	59.92 %	**20 % HCR**
	18. 405	NM	39.92 %	
Rafael Urdaneta	1875	HCR	48.76 %	**2.39 % NM**
	1.967	NM	51.15 %	
García de Hevia Pquia Boca de Grita	879	HCR	62.56 %	**25.2 % HCR**
	525	NM	37.36 %	

TOTAL GENERAL	60.442 VOTOS HCR 36.445 VOTOS NM	60.47% HCR 39.40% NM	21.07 % HCR

Estudio jurídico sobre el Cierre de Frontera

Las relaciones entre Venezuela y Colombia, están determinadas por el intercambio humano, social, cultural y comercial, los cuales generan la existencia de problemas fronterizos de índole socioeconómicos y, por supuesto, de inseguridad, habida cuenta de que la relación dinámica en la frontera entre ambos países, ha permitido que esos espacios sean considerados como frontera viva, lo cual contribuye con la integración latinoamericana, apoyada en los textos constitucionales y demás ordenamientos jurídicos (,) de ambos países.

El Estatuto sobre el Régimen Fronterizo, suscrito entre Venezuela y Colombia, el 05 de agosto de 1942, en el marco del Tratado de Tonchalá, constituye uno de los primeros antecedentes de política bilateral para la integración y las relaciones de la frontera

Barrera militar separa a la población civil que fue sorprendida por el cierre de frontera

binacional. Dicho Estatuto establecía una política parcialmente elástica, y dirigida a regular la movilidad relativa a la circulación de personas, bienes y servicios. El Estatuto reconoce la "Franja Fronteriza", a ambos lados del límite internacional, como facilitadora de las relaciones y la vida en la frontera, pues se le otorga a esta Zona Fronteriza Binacional, el carácter de articuladora.

En cuanto a la circulación de las personas, se estipuló la creación de documentos de identidad con validez local denominados, permisos fronterizos, los cuales consistían en poder permanecer en el territorio del otro país, por un período de ocho días prorrogables; el Permiso de Turismo, válido por treinta días; el Permiso Fronterizo Industrial, válido por el tiempo que consideren las autoridades; y la Cédula Pecuaria Fronteriza, para actividades de comercio de ganado y tránsito de pastores y vaqueros en la región fronteriza. Otro aspecto a resaltar de este Estatuto, es el reconocimiento de potestades a las autoridades nacionales en la frontera, para cooperar en los aspectos: educativos, sanitarios, policiales y ambientales.

Hoy en día, para transitar de Colombia a Venezuela y viceversa, sólo se requiere sellar el pasaporte al entrar y salir, y la permanencia puede ser de 90 días.

De acuerdo con la información oficial, el "cierre de la frontera" se mantuvo hasta el lunes 15 de abril de 2013, es decir, que durante

Militares con equipo anti motín retienen el libre tránsito de cientos de personas en la Avenida Venezuela de San Antonio del Táchira.

seis días estuvo impedido el paso. Tal medida, fundamenta en la ejecución de la Resolución Conjunta, emanada de los Ministros de Defensa, Diego Molero, y de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, publicada en la Gaceta Oficial No.40142, de fecha 08 de abril del año en curso, que según lo expresado en su artículo 1, persigue ***"…establecer estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, vehículos y carga, por vía terrestre, durante el período comprendido desde las 6:00 horas (6:00a.m.) del día martes nueve (09) de abril de 2013, hasta las seis horas (6:00 m.) del día lunes quince (15) de abril de 2013…",*** encomendando la ejecución de la misma, al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Ahora bien, ciñéndonos a la letra de la Resolución comentada, queda claro que no se ordenó el cierre total de la frontera, sino que ***se estableció un estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, vehículos y carga***, pero la ejecución de tal resolución de bloquear la frontera, fue irracional, desmesurada y desproporcionada, por parte de los efectivos al mando del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –CEOFANB-, quienes argumentaron estar actuando bajo las órdenes del Mayor General Wilmer Barrientos.

Del análisis del contenido de la citada Resolución, aunada a la implementación o ejecución de la misma, por parte del Comando de Frontera del Destacamento Nº 11, y del Batallón de Paracaidistas

del Ejército provenientes de Maracay, se evidencia por vía de facto, la restricción de garantías fundamentales establecidas formalmente en la Constitución vigente, la cual ordena que únicamente pueden ser suspendidas, a través de la Declaratoria de los Estados de Excepción, los cuales sólo proceden, siguiendo lo establecido en los artículos 337, 339 y 236 numeral 7, de la Carta Política Magna; los cuales se transcriben a continuación:

> ***"Artículo 337.***
> ***El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles."***

En este caso examinado, no existían circunstancias de ningún

orden que afectaran gravemente la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, de sus instituciones o de sus ciudadanos, máxime cuando la misma letra de la carta política nos entrega una interpretación auténtica constitucional, de lo que se ha de calificar como Estados de Excepción, por lo que no le es dable, ni siquiera a su último interprete, cual es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hacerlo y menos aún en forma acomodaticia o adecuada a un concepto de interés, por lo que no se explica y menos aún justifica constitucionalmente, la medida tomada por el Gobierno venezolano a cargo de Nicolás Maduro Moros, como presidente Encargado de la República, quien restringió derechos consagrados en los ya supramencionados artículos, como lo son: el Derecho a la Salud y por ende a la Vida, pues se impidió el tránsito de personas que necesitaban hacerse tratamientos que no pueden paralizarse, so pena de llegar a la muerte; hubo incomunicación para aquellos que quedaron al otro lado de la frontera, y para quienes resultaron detenidos en el Destacamento Número 11 (,) de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, y a quienes también se les negó el debido proceso, consagrado como derecho intangible en el 49 Constitucional, así como en el 339 que consagra:

> ***"Artículo 339.***
> ***El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la***

> ***Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.***

Para el "cierre fronterizo", llevado a cabo el día 9 de abril de 2013, el Ejecutivo nacional, no decretó el Estado de Excepción, ni lo presentó dentro de los ochos días siguientes a la Asamblea Nacional, ni a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se pone de manifiesto la flagrante violación por parte de las autoridades del Gobierno venezolano, a las leyes de la República, en la toma de decisiones de éste tipo que afectan no sólo a la Nación sino a un país hermano, erigiéndose en vías de hecho, de facto o de fuerza, propio de regímenes totalitaristas.

El artículo 236 de la Carta Magna establece las atribuciones en estos casos del Jefe de Estado como se expone a continuación:

Artículo 236.

Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:

7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.

Como se expuso anteriormente, el para ese entonces presidente Encargado de la República, Nicolás Maduro Moros, no declaró el Estado de Excepción, ni decretó la restricción de garantías consagradas en la Carta Magna.

Todo esto en concordancia con el artículo 7, numeral 13 de la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, que cita textualmente:

"Artículo 7.

No podrán ser restringidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de los derechos a:

13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública."

Ahora bien, del análisis de los artículos anteriores, se desprende el procedimiento a través del cual el Presidente de la

República, en Consejo de Ministros, es el único facultado para decretar Estados de Excepción, que traerían como consecuencia, la limitación o restricción de garantías constitucionales, procedimiento éste que no fue realizado, ya que no existían causales para declarar el Estado de Excepción alguno que, explique y mucho menos justifique la situación que se estaba presentando en la frontera tachirense con la República de Colombia, pues a raíz de la Resolución Conjunta, suscrita por dos personeros ministeriales del Ejecutivo, que no representan al Consejo de Ministros, como lo fueron: el General Néstor Luis Reverol Torres, para ese entonces el ministro del Poder Popular para Relaciones del Interior y de Justicia, y el Almirante Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, quienes obraron en una evidente y abierta extra limitación en el ejercicio de sus funciones, resolvieron de alguna u otra manera restringir garantías constitucionales, violando con esto el debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y a raíz de esta situación, se ejecutan actos de flagrante violación a los Derechos Humanos, entre ellos, el del Derecho a la Comunicación, al Debido Proceso y al Sufragio, que bajo ninguna circunstancia pueden limitarse, incluso, aún cuando hayan sido suspendidas las garantías constitucionales, así lo contemplan también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los cuales han sido suscritos, firmados, aprobados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, sin reserva alguna, y

que forman parte de su ordenamiento interno; como se expone a continuación:

"**Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.** Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.

Artículo 4.

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

Artículo 12.

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular

libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.".

El Gobierno venezolano, violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues no existía una situación que pusiera en peligro la vida de la Nación, porque se trataba de un proceso electoral presidencial en Venezuela, y además no adoptó medidas conjuntas con los Estados partes, como es el caso de Colombia.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también específica los casos en los que un país miembro, puede suspender las garantías, tal y como lo expone su artículo 27, que señala textualmente:

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.

Artículo 27.

Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

35. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17. (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.".

Durante los seis días del "cierre de la frontera colombo-venezolana", en abril de 2013, se suspendió de facto, el Derecho a la Seguridad Personal, pues quienes quedaron atrapados estaban a la deriva; no hubo protección a la familia, ya que diversos grupos familiares que se encontraban en Cúcuta tuvieron que dormir en sus vehículos, esperando una posibilidad para pasar a territorio venezolano, mientras otros corrían peligro si se decidían a hacerlo a través de las trochas.

También se violentaron los derechos del niño, de los ancianos y personas con discapacidad, de los denominados grupos humanos vulnerables, al no poder llegar a sus hogares, dormir en un lugar seguro y recibir educación, así como también al ser expuestos a la inseguridad, al quedar gran parte de ellos a las afueras del Destacamento Número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando sus padres fueron detenidos e incomunicados, por intentar cruzar la frontera, en detrimento del "interés superior del niño y adolescente", principio y derecho rector universal para estos seres humanos y que la República, a través de sus autoridades funcionariales estaban obligados, como es su deber, a observar estrictamente, sin que valgan como excusa el "cumplimiento de órdenes superiores". La Convención también establece que:

> ***"3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización***

> ***de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión."***

Esta medida, también la incumplió el Gobierno venezolano, pues no informó a los demás Estados partes de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a través del Secretario General de la Organización de Estados Americanos –OEA-, ni por medio de ninguna otra modalidad expedita de comunicación oficial.

Ahora bien, es evidente que ésta Resolución Conjunta, por parte de dos ministros incompetentes y usurpadores, se encuentra viciada de inconstitucionalidad, y por ende de nulidad absoluta de toda nulidad. En otras partes la doctrina los denomina "actos inexistentes", ni siquiera existen para el derecho y no merecen ser declarados nulos, por cuanto no deben ser ni siquiera apreciados y mucho menos ejecutados, no obstante, lo aplicaron como fue manifiestamente notorio y público, y por ende eximido de probanza alguna, vulnerando así el principio de legalidad, la seguridad jurídica, y normativas internacionales suscritas por el Estado venezolano, específicamente los contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pudiendo ser estimulados para conocer de estas violaciones, los órganos Internacionales y la jurisdicción internacional correspondiente, con aplicación de los

procedimientos internacionales respectivos, a los que pertenece como sistema el Estado venezolano.

Por tales hechos se está frente a una **Violación del Ordenamiento Jurídico Interno**, concretamente el artículo 25 constitucional, que establece textualmente:

> *"Artículo 25.*
> *Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por*

Carta Magna vulnerada en el bloqueo fronterizo.

esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores."

El referido artículo, consagra la garantía objetiva y la más eficaz forma de protección constitucional, que es el hecho de considerar nulos y anulables, los actos irregulares, emanados por la administración pública.

Delitos de Lesa Humanidad

También es indiscutible que los hechos aquí narrados, constituyen violaciones masivas de derechos humanos colectivos y difusos, ya que al cerrarse totalmente la frontera, se afecta el derecho humano al trabajo, al sufragio, a la alimentación, a la educación, salud, tránsito y económicos, de centenares de ciudadanos del Estado, incuantificables e inmensurables, y además es un trato discriminatorio a los pobladores del estado Táchira, y a otra región binacional, como es el Departamento de Norte de Santander de la República de Colombia, pues son las únicas zonas fronterizas, cuyo tránsito y otros derechos se vieron limitados, cercenados, suspendidos y restringidos por la fuerza, razones que en su conjunto, constituyen graves delitos de lesa humanidad, que de acuerdo a la doctrina, la jurisprudencia y normas nacionales como internacionales, son imprescriptibles, así lo ha consagrado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 29, cita textualmente:

"Artículo 29.

El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

(Subrayado propio para éste escrito)".

De todo lo narrado, no hay duda de que estamos frente a graves violaciones de derechos humanos fundamentales, y tal como se mencionó, las acciones para perseguirlos y sancionarlos son imprescriptibles. Al respecto, vale la pena mencionar varios países latinoamericanos, como: Chile, Argentina y Perú, luego de derrocados los gobiernos dictatoriales, se han condenado a expresidentes, y a altos funcionarios, por la comisión de delitos de lesa humanidad, un ejemplo de ello, es el caso del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien está sentenciado por delitos de lesa humanidad, otro ejemplo, ésta vez de Argentina, es el juicio llevado contra el Camarista Federal de Mendoza, Luis Miret, acusado de mal desempeño en sus funciones, por haber consentido tres

casos de delitos de lesa humanidad en 1975, y por su actuación en otras dos causas, tramitadas tras el regreso de la democracia, y su principal acusación, es no haber investigado tres casos de secuestro y torturas, ocurridas entre septiembre y octubre de 1975 en Mendoza, durante el Gobierno de Isabel Perón.

De igual manera, ocurrió con Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, desde el año 1976 a 1981, quien el 17 de mayo de 2013, falleció en el penal de Marcos Paz, donde se encontraba preso cumpliendo cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante esa dictadura en la Base Militar de Campo de Mayo.

Es evidente que el Gobierno venezolano no puede desconocer el derecho natural de los pueblos binacionales a comunicarse y al libre tránsito, ya que estos pasos fronterizos datan desde varios siglos, y al mismo tiempo con ésta acción, se han violentado derechos legalmente reconocidos por nuestra Constitución, ya que al interrumpir de manera unilateral el paso entre zonas fronterizas, se han violado tangiblemente los derechos humanos colectivos y difusos, así como el derecho al libre tránsito de los pobladores de éstas zonas, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, entre otros.

Indiscutiblemente ésta actuación es a todas luces arbitraria, careciendo de fundamento constitucional alguno, ya que los alegatos presentados por las autoridades venezolanas son contrarios al derecho de ambos países, y al Derecho Internacional.

Sin lugar a dudas, ésta actuación constituye una arremetida contra los pobladores de ésta zona fronteriza colombo – venezolana, a quienes les han sido violados abierta y flagrantemente, en forma pública y notoria, sus derechos humanos más fundamentales, al habérseles atentado en forma flagrante actual y consumada, la violación al derecho a la salud y, por ende, a la vida, a la asistencia médica, a la educación, y a la alimentación, entre otros no menos importantes derechos humanos fundamentales, reconocidos en tratados internacionales, suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país.

Responsabilidad por Acción y Omisión

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, e igualmente, establece esta norma de la Carta Magna, que las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra, son imprescriptibles, por ello es importante que se identifiquen y se sancionen a los responsables de estos hechos de cierre de la frontera, en concordancia con el artículo 25, de la Constitución de la República que establece:

"***Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y***

administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores".

Es nuestra obligación resaltar que en el caso del bloqueo económico, social y electoral en la frontera, hay responsabilidad por omisión en grado de determinador y por ende autoría intelectual, de quien fuera el presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pues por mandato constitucional, está obligado a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, tal y como lo prevé el artículo constitucional 236 al señalar que: "***Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley".***

Detrás de las mallas de alambre grupos de paracaidistas detienen a quienes transitan por las trochas

Así mismo, dos subalternos suyos, los ministros de Defensa, Diego Molero, y de Relaciones para el Interior y de Justicia, Néstor Reverol, actuaron y ordenaron ejecutar, y por ende son autores materiales, haciéndolo al margen del ordenamiento jurídico, al cerrar la frontera colombo-venezolana, cuando no tenían facultad para ello, pues como se ha indicado reiteradamente, sólo ante un hecho grave, debidamente justificado y en Consejo de Ministros, mediante la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y previa notificación al Secretario General de la Organización de Estados Americanos –OEA-, a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- ,y al Presidente de la Asamblea Nacional, se pueden restringir derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito, al trabajo, al sufragio, la salud, la educación y los derechos económicos.

Son responsables por acción y autoría material estos dos Ministros, y a su vez, en igual entidad e identidad de autoría, el Mayor General Wilmer Barrientos, como director del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –CEOFANB-, quien ordenó a sus subalternos la ejecución de esta medida inconstitucional, e igualmente incurre en responsabilidad el jefe de la Brigada de Paracaidistas del Ejército, General Jesús Suárez Chourio, junto con su personal subalterno, sin que valgan excusas de “cumplimiento de órdenes superiores”, tal como lo prescribe nuestra Constitución, para así evitar la impunidad y la prescriptabilidad.

De igual manera, responden por omisión, la Fiscal General de la República, la Procuradora General de la República y la Defensora del Pueblo; la primera por ser la titular y monopolista del ejercicio de la acción penal; la segunda por ser la abogada y representante legal del Estado venezolano y debe velar por su legalidad, y la tercera por ser la responsable de asumir la defensa de los derechos e intereses del pueblo, máxime cuando se han violentado de manera colectiva y masiva, como lo fue analizado.

Estas tres funcionarias del Poder Público nacional, debieron de actuar de inmediato ante tan evidente, público y notorio atropello de violación flagrante de derechos humanos fundamentales. La "noticia criminis" se manifestó en forma tangible y manifiesta, aunque le ha dado a la Fiscal General señalar que no acciona si no le "denuncian", obviando y más que esto, "omitiendo" abiertamente su mandato y función constitucional de perseguir los hechos punibles al tener conocimiento de su existencia por cualesquiera forma o modalidad, y los hechos del "cierre de la frontera colombo-venezolana", en esta geografía occidental de Venezuela, entre el 9 de abril al 14 de abril de 2013, fue más que notorio, público y protagónico, a nivel nacional e internacional, a través de los medios de comunicación social masivos, hablados, escritos y audiovisuados, lo que a la luz del Derecho Probatorio; por ser hechos notorios y comunicacionales, están exentos de prueba alguna.

Altos Mandos venezolanos responsables de delitos de Lesa Humanidad

Nicolás Maduro. Presidente Encargado de la República y Comandante en Jefe de la FANB

General Néstor Reverol. Ministro de Interior y Justicia

Almirante Diego Molero. Ministro de la Defensa

Capitán J.G. Vielma Mora. Gobernador del estado Táchira

Mayor General Wilmer Barrientos. Jefe del CEOFANB

General Jesús Suárez Chourio. Comandante Brigada Paracaidistas

A su vez, incurren en responsabilidad civil, penal, administrativa y hasta política, autoridades civiles, como el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y las autoridades militares que participaron en estos hechos del bloqueo fronterizo. En otras palabras, desde el presidente Nicolás Maduro, hasta el último solado ó policía que participó en la ejecución de tales acciones, y en su omisión, por no evitarlos, perseguirlos y sancionarlos, son responsables ante la historia y la justicia.

Por ello es fundamentalmente obligatorio que se investigue y castigue a todos y cada uno de los responsables de la cadena de mando que accionaron en este caso contrariamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a los Tratados Internacionales, para evitar que esta situación vuelva a presentarse en el futuro.

Es necesario que la Asamblea Nacional venezolana, apruebe la Ley Orgánica de Fronteras, con el fin de que se regulen los Estados de Excepción en estos espacios geográficos y geopolíticos de frontera, y se establezcan normas para casos especiales, donde haya que restringir los derechos y garantías en los Estados fronterizos, cuyo ordenamiento jurídico se erija como una verdadera potestad interdiccional contra el acto arbitrario del poder del Estado.

¡Que no se repita!

Se ha convertido en una práctica ilegal el "cierre fronterizo" durante la mayoría de los procesos electorales realizados en Venezuela, sin embargo, para las elecciones regionales del 16 de diciembre del año 2012, la medida se tomó con cuatro días de antelación, cuando anteriormente era de tan solo 24 horas, y en dos oportunidades, ni siquiera se llevó a cabo este bloqueo de la frontera.

En abril de 2013, la acción fue exagerada, seis días antes del proceso electoral presidencial venezolano, se cerraron las fronteras colombo - venezolanas, lo que además de violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, y otros tratados, lesiona las relaciones comerciales y sociales entre ambas naciones.

El interés de este análisis del “cierre de frontera”, es identificar elementos sociopolíticos y jurídicos vulnerados, para que nunca jamás se vuelvan a cerrar las fronteras, salvo que sean hechos de fuerza mayor que obliguen a los Estados a cerrarla temporalmente, ajustándose al protocolo, los preceptos y bitácoras constitucionales de ambas naciones, y los tratados internacionales aprobados y ratificados por la República.

Es necesario reiterar que debe aprobarse a corto plazo la Ley Orgánica de Fronteras, en la que se desarrollen las normas por las cuales en un caso determinado, se pueda cerrar los espacios fronterizos, pero solo decretándolo el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y mediante coordinaciones diplomáticas con la República de Colombia e intervención y participación a organismos Internacionales.

Los organismos de seguridad del Estado, y especialmente las Fuerzas Militares, deben conocer que la “Teoría de la Obediencia Debida y Legítima por Cumplimiento del Deber”, en la que un subalterno, aparentemente está obligado a cumplir las órdenes que le impartió un superior, está proscrita, en la Constitución Venezolana, por mandato de su artículo 25, por lo que cualquier militar o autoridad policial que cumpla una orden inconstitucional de cierre de frontera, es tan responsable como el que la ordena.

Cientos de personas fueron sorprendidas en plena línea fronteriza al margen del río Táchira.

Militares armados también ingresaron a fincas cercanas a la zona fronteriza desde donde no dejaban salir a los ciudadanos

Nuestro interés es que el presente informe de un análisis del cierre de la frontera colombo-venezolana, sirva como documento probatorio para que los organismos públicos con funciones administrativas y jurisdiccionales, investiguen y sancionen a los responsables de éstos hechos que lesionaron gravemente los derechos humanos, con graves consecuencias humanas, psicológicas, socioeconómicas y políticas a los hombres y mujeres de la frontera más dinámica de América Latina, entre el Táchira y el Norte de Santander, que como lo explicara Arturo Uslar Pietri, es geopolíticamente un "Tercer País".

Aunque la frontera no es otra nación jurídica y políticamente organizada como tal, si se vislumbran como una constitución de un Estado "sui generis", con sus elementos, componentes muy particulares y de perfiles propios, que los hacen espacios geográficos únicos, en cualesquiera frontera mundial, y en consecuencia es respetable y ha de ser respetada integralmente por los gobiernos de ambas naciones, herederos comunes de la doctrina de Simón Bolívar, El Libertador.

Índice

- Presentación **09**
- Visión Fronteriza **11**
- Acuerdos y desacuerdos Venezuela - Colombia **17**
- El Bloqueo a dos países **25**
- Las trochas **47**
- Pérdidas Económicas **57**
- Análisis Electoral **65**
- Estudio Jurídico **73**
- Delitos de lesa humanidad **91**
- Responsabilidades por Acción y por Omisión **95**
- ¡Que no se repita! **101**